

Pobreza en México

James Chyper

Con el debate actual en los foros públicos (y en las calles) sobre la política del libre comercio, y la retórica generada acerca de que si el libre comercio viola o no “los derechos humanos”, o trabaja para el beneficio de las Multinacionales, creo que puede ser ilustrativo conocer los elementos que sustentan estos argumentos. El asunto es determinar si los problemas económicos de los países en desarrollo son o no el resultado de las actividades predatorias de corporaciones multinacionales y las políticas de auto-beneficio del gobierno de los Estados Unidos, o si estos problemas económicos tienen causas internas. Este es realmente el meollo del asunto, ya que los opositores al libre comercio sostienen que los terminos de estos tratados, en si mismos han empobrecido a los socios comerciales menos desarrollados de los Estados Unidos. Ellos ven el mundo como un juego suma-cero, con cualquier incremento en la riqueza de los Estados Unidos obtenido a expensas de alguien más. Para ser más explícitos: si yo gasto dinero en una cena con bistec, algún niño en Honduras se queda sin desayunar.

Estas ideas no son nuevas. La Premisa de que los países desarrollados han mantenido en la pobreza a los países en desarrollo fue resumida por teóricos neo-marxistas en los 60s en la “Teoría de la Dependencia”. Esto capturó la atención y se volvió un gran estilo entre los intelectuales en Latinoamérica (Los Dependencistas), quienes hicieron eco a la acusación de que “El capital” en los Estados Unidos y Europa explotan deliberadamente la mano de obra y bienes baratos Latinoamericanos, y los atrapan en un círculo de pobreza. Si bien es cierto que los Estados Unidos han dependido de Latinoamérica para importar mercancías baratas, esos ingresos por exportación representan para Latinoamérica tanto una oportunidad como una trampa. Esos ingresos fueron apropiados, dislocados y peligrosamente invertidos por las oligarquías y las burocracias estatales, quienes han manejado (y arruinando) las economías Latinoamericanas la mayor parte de este siglo. La influencia o presencia de corporaciones multinacionales, o los implícitos términos de los tratados de comercio, poco tienen que ver con ello.

Ya que yo he estado estudiando la historia reciente de México, me agradaría compartir algunos de los factores internos que explican la pobreza de México a través de las últimas décadas. Lo que los registros históricos muestran es que los problemas de México son, en su mayoría, auto-inflingidos, y en naturaleza políticos. Esto no es una sorpresa para cualquiera que haya estudiado el desarrollo de Latinoamérica en el siglo veinte. De hecho, las teorías de la dependencia han sido, en su mayoría, reemplazadas por teorías de desarrollo que están económicamente mas informadas y son menos dogmáticas. A continuación comparto un corto resumen de los problemas del desarrollo de México, como una ilustración de cómo el dominio de la economía por parte del estado y NO la influencia de corporaciones multinacionales, han empobrecido a este país rico en recursos.

El moderno Sistema Político Mexicano fue formado siguiendo los períodos de la revolución mexicana, cuando los hombres que vivieron durante los años de la revolución consolidaron el gobierno central en torno a una constitución y programa basados en un consenso de valores “revolucionarios”. En los años 20s, y 30s, este consenso se centralizó en un partido $\frac{3}{4}$ el PRM que después se convirtió en el PRI $\frac{3}{4}$ y la oficina del Presidente. Estos fueron los años formativos del modelo de desarrollo económico proteccionista y regido por el estado que prevaleció en el país el resto del siglo. Este modelo de gobierno autoritario y el control estatal de la economía es ampliamente responsable por el carácter del desarrollo económico de México, y por sus deficiencias.

El proteccionismo y el desarrollo dirigido por el estado en México, tuvo los mismos resultados que tuvo el proteccionismo para los Estados Unidos en la segunda mitad de los años 20s – desalentó a la competencia e hizo a las industrias protegidas depender de subsidios del estado. Los subsidios del estado son, a propósito, finalmente pagados por alguien en la sociedad: mercancías exentas de derechos para algunos, significan trabajo de esclavo para otros. Ironicamente políticas económicas “revolucionarias” o populistas, produjeron efectos no-intencionales en el bienestar de los grupos populares mexicanos, incluyendo ambos, trabajadores rurales y de la ciudad, erosionando sus salarios a través del estancamiento económico e inflación. Estas políticas desalentaron la inversión privada, fomentaron el “capital volátil” y alentaron una ética de enriquecimiento personal a través del carácter de “busca-rentas” dentro de la burocracia estatal. En el “busca-rentas” existe una aceptación de la idea que el servir al estado es una oportunidad para el auto-enriquecimiento.

Los presidentes mexicanos usaron su control sobre la política económica para hacer dos cosas: Promover el crecimiento económico y distribuir los trabajos y riqueza resultantes entre importantes grupos de apoyo. De este modo, el gobierno procuró incluir sectores políticamente relevantes de la sociedad en la agenda del crecimiento nacional a través de la distribución de beneficios económicos o con el subsidio de productos y servicios básicos. El gobierno nacionalizó industrias y servicios públicos estratégicos, subsidió la producción de alimentos e insumos industriales, y usó la reforma agraria para calmar a la población rural cuando los alimentos subsidiados se tornaron en su desventaja. Finalmente en respuesta al creciente poder del sector privado, el gobierno incorporó las cabezas de la industria dentro del proyecto-estado capitalista, agregando otro poderoso grupo de interés hacia el consenso que estaba construyendo.

El sector estatal se ha desarrollado a lo largo del siglo por medio de proyectos de trabajos públicos, la nacionalización de tierras, la nacionalización de minerales subterráneos y riqueza petrolera y de compañías petroleras extranjeras, reforma agraria y la creación de empresas “paraestatales”. Esto representó la realización de la visión económica de Lázaro Cárdenas del estado como un garante del bienestar de los grupos populares. El poder e influencia sobre política económica que supuestamente

debía residir en los sectores populares mexicanos, de hecho residió en El Partido, que actuó como regulador de la economía, en una extensión lógica de su papel como protector de los intereses de esos sectores de la sociedad.

Como en otros sistemas estado-dominante o partido-dominante, la gente cuyos intereses estaban mejor “protegidos” fueron aquellos quienes estaban mejor conectados políticamente. Esto significó que poderosos industriales, líderes sindicales y miembros de la burocracia estatal gozaron de influencia y acceso a fondos públicos para su enriquecimiento personal. Este carácter distintivo no fue solamente una situación de corrupción, pero sí una lógica y natural extensión de la indisciplinada persecución de metas políticas a corto plazo a expensas de políticas económicas a largo plazo. James Cypher, economista de la Universidad del Estado de California, y autor de *Estado y Capital en México*, discute la mentalidad financiera detalladamente en su libro. A continuación una corta cita:

Los grupos de interés financiero viven en el mundo de la inmediatez y dentro de los confines de la esfera del dinero y capital comercial. Los problemas de la tecnología, la proporción entre capital y trabajo, la restitución de costos sociales, las estrategias de inversión a largo plazo, las paraestatales, el control del capital volátil y otros problemas, estaban más allá del interés y la capacidad de la mentalidad financiera tipo hoja-de-balance de los grupos de interés dentro de los autores políticos (James Cypher, *Estado y Capital en México- Política de desarrollo desde 1940*, Boulder Westview Press, 1990, p. 67).

Al igual que con otros experimentos en política económica regidos por el estado, el modelo interno de desarrollo mexicano puede ser sostenido sólo por un tiempo limitado. Este modelo se vuelve insostenible, cuando las presiones de los sectores populares e industriales obligan a continuar manteniendo subsidios y proteccionismo por parte del estado más allá de la fase en que debían haber sido eliminados. Este es un problema político, pero en tanto los modelos de desarrollo conducidos por el estado son inherentemente políticos, esto es también un problema teórico. La ausencia de presiones de mercado significa que no existen incentivos para conjuntar políticas de inversión para responder en base a ganancias: exactamente la clase de disciplina que los accionistas imponen en el manejo en orden de corporaciones públicas para acrecentar al máximo el uso de su capital. En México el “accionista” era el estado y el poder de monopolio del estado asegura que los precios por productos finales nacionales podían permanecer altos y el costo de entradas para esas industrias podían permanecer bajos. El resultado fue un alto costo real de producción y bajo rendimiento en capital, encubierto por entradas subsidiadas del estado, incentivos al impuesto, y control de precios. Independientemente de las deficiencias que tienen en sus políticas sociales, las economías de mercado hacen un mejor trabajo distribuyendo los recursos de una manera más eficiente que las economías autoritarias. A través de la politización de su modelo económico, México intentó deliberadamente evitar atenerse a la disciplina inherente al capitalismo y, en las palabras de un historiador,

buscar la “liberación de las fuerzas ‘naturales’ del mercado libre” (Frank Brandenburg, La formación del México moderno, Englewood Cliffs, New Jersey. Prentice-Hall, 1964, 211).

Esta ha sido una continua reflexión de los problemas políticos. Mientras, El Partido y la presidencia se volvieron cada vez más sensibles a los eventos políticos desde aproximadamente la mitad de los 60s, hacia mediados de los 70s. Consecuentemente, la planeación económica se politizó hasta el punto en que la política económica se torno irracional. La política económica racional evita los extremos que produce consecuencias irónicas, ³/₄aquellas que empobrecen a la gente a quienes debían proteger. La política económica de México se volvió irónica no sólo en teoría, sino también en su implementación ya que el gobierno pidió dinero prestado e invirtió este en subsidios para el sector paraestatal, o usó este para subsidiar directamente el ingreso y consumo. Esto fue precisamente lo que el Secretario de Hacienda del gobierno de Luis Echeverría, Ortiz Mena, había propuesto no hacer con fondos prestados, pero la planeación económica fue superada por las presiones políticas. La politización de una creciente porción de la economía resultó en un incremento del salario que sobrepasó la productividad, y cuando el crecimiento económico comenzó a desacelerarse, la presión popular por los salarios no disminuyó. Consecuentemente el sector paraestatal mexicano comenzó a drenar los recursos públicos, en vez de contribuir a los mismos.

En vez de disminuir la inversión pública o el empleo público, ambas, las administraciones de Echeverría y Lopez Portillo las incrementaron. En las casi dos décadas entre los programas económicos de Echeverría, iniciados en 1970, y hasta el término de la presidencia de Miguel de la Madrid en 1988, el número de las empresas del estado se incrementaron de 180 a 1,155, y el número de empleados de sector público se duplicó de 1 millón a 2.2 millones (Peter S. Cleaves y Charles J. Stephens, “Hombres de Negocios y Política Económica en México”, Latin American Research Review, Vol. 26, No. 2, 1991, 188). El gasto público creció de un 20 por ciento del PNB al 50% por ciento en 1986, la deuda externa de México, que financió el crecimiento del sector público durante este período, se incrementó de 4.5 billones de dolares a 104 billones de dolares. El resultado fue que para 1988, el 70% por ciento de los ahorros del país, estaban “siendo empleados para el servicio de la deuda o para subsidiar las industrias del estado” cualquiera de los dos (Peter S. Cleaves & Charles J. Stephens, 89). Si bien esto compro un poco de tiempo a la agitación política, el resultado fue desastroso, en el largo plazo, ya que estas políticas populistas subordinaron “la hasta entonces, extremadamente exitosa política económica a las ganancias políticas a corto plazo, con banqueros extranjeros y un ingreso por el petróleo financiando el esquema total” (Luis Rubio y Roberto Blum, El dilema de México: Los Origenes Politicos de la Crisis Económica, Boulder Westview Press, 1984, p. 181).

En el periodo entre 1970 y 1982, la expansión del sector público, el incremento en el gasto del gobierno, el desenlace de la política monetaria y fiscal, y el incremento en

deudas extranjeras creó una crisis financiera lentamente construida. Esta crisis desgastó los salarios reales de los trabajadores mexicanos, debilitando el valor de la moneda, y condujo a la recesión. Mientras la crisis económica de México empeoraba, el gobierno se quedó sin opciones para continuar financiando sus compromisos hacia los sectores público y popular. En febrero 18, de 1982, a pesar de las promesas del presidente Lopez Portillo, el Banco de México abandonó su apoyo al peso y el peso sufrió una devaluación “ de proporciones monstruosas, pero de similar magnitud a las desproporciones en los términos del mercado en México”. (Luis Rubio y Roberto Blum, p. 223). Esto forzó a la entrante administración de Miguel de la Madrid a imponer un programa de austeridad para bajar los sueldos y gastos públicos y estabilizar la deuda de México.

El presidente Salinas de Gortari, quien sucedió a Miguel de la Madrid, continuó las iniciativas de privatización de Miguel de la Madrid y cambió de dirección el enfoque de desarrollo constante con la sustitución de las importaciones hacia una economía orientada a la exportación que estimulara a la industria mexicana a competir internacionalmente. (Luis Rubio y Roberto Blum, p.189) Aunque designadas simplemente como “ortodoxas”, este tipo de políticas iban mano con mano con políticas monetarias y fiscales que eran racionales en tanto que ellas fueran sostenibles. No solo el gasto público fue reducido hacia el punto más cercano a los ingresos del gobierno, sino que también las empresas del estado fueron privatizadas para hacerlas económicamente más funcionales. Sin embargo, este regreso a la ortodoxia no debe ser tomado al valor nominal como una total adopción de una economía liberal, y ciertamente tampoco es un regreso al modelo Porfiriano del Capitalismo oligárquico, ni una concesión eclavista por la presión de corporativas multinacionales.

El cambio de estatismo a ortodoxia provino de la aceptación de parte del gobierno de la insostenibilidad de su propio modelo económico. A pesar del reconocimiento del estado de que el sector privado debe jugar un papel más importante en la actividad pública y privada del que se le ha dado en el pasado, el estado aún fija los parámetros para el desarrollo económico. De hecho, ya que el gobierno ha permanecido firmemente en el control de la política económica, el movimiento hacia la privatización y la apertura en las restricciones al comercio, representan el uso continuo de el sector privado como una herramienta para la política pública, solo con un renovado énfasis en la empresa privada como el motor del crecimiento. Como lo expresó un hombre de negocios de Monterrey:

El estado ha favorecido los intereses del sector privado, no porque el sector privado lo haya forzado para perseguir esta meta, sino porque los intereses del sector privado resultaron ir a tono con los intereses del estado. (Peter Cleaves and Charles J. Stephens, “Hombres de Negocios y Política Económica en México”. ,” Latin American Research Review, Vol,26, No. 2, 1991, p. 191)

Esta fuente apoya mi propia creencia de que el gobierno de México ha sostenido no una revolución sino mas bien un cambio en su modo de operación . Este mantiene su autoridad para arbitrar entre sectores políticos, y que deja abierta la opción de usar políticas económicas para manejar conflictos políticos, justo como ha sido en el pasado. Como en los países sudamericanos, las medidas económicas populistas en México resultaron insostenibles, y dirigidas hacia una crisis financiera y la pérdida de legitimidad del partido dominante. A diferencia de los países Sudamericanos, México no sucumbió a dictaduras militares, pero en su lugar ha hecho su modelo autoritario mas inclusivo, en un desesperado intento por parecer mas democráticos. Este acercamiento hacia la política económica ha resultado mas ortodoxo. Con las consecuencias de la crisis de la deuda de los 80s, los Presidentes Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, cambiaron el enfoque de desarrollo económico fuera del sector público o “ paraestatal “ , y hacia el sector privado. Ellos han permitido a partidos rivales desafiar al PRI, y ganar cargos públicos tradicionalmente sostenidos por el PRI. Con la vuelta del siglo, es interesante especular si las reformas de los 80s, han producido un cambio fundamental en el modelo político y económico de México, o si el estilo inclusivo-autoritario de políticas persistirá.